



**PARTIDO
SOCIALISTA
DE CHILE**

RESOLUCIONES PLENO

COMITÉ

CENTRAL

Stgo. 28 de mayo 2020

Santiago, 28 de mayo de 2020



RESOLUCIONES PLENO DEL COMITÉ CENTRAL

PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

Enfrentados ante una emergencia sanitaria inédita en la historia del mundo moderno, el Comité Central del Partido Socialista de Chile, reunido de forma telemática con todos sus miembros oficiales, de norte a sur, las y los presidentes regionales, más invitados e invitadas del mundo parlamentario, municipal y social, declaran:

Contexto de la pandemia

1. La pandemia del COVID-19 se ha esparcido por el mundo entero durante los últimos seis meses y ya ha cobrado cientos de miles de vidas humanas. En Europa, golpeó con acelerada velocidad. Al poco tiempo, Italia y España se confinaban total y completamente, mientras que la mayoría de sus vecinos actuaban con estupor frente a un virus desconocido y mortal. En América Latina, la conciencia de la gravedad de la emergencia vino de la mano de las primeras muertes, aunque no de forma general. Varios países de la región, como México, Nicaragua y, sobre todo, Brasil, han tenido una conducta que bien podría calificarse de negacionista frente a la crisis. Jair Bolsonaro representa, de forma icónica, una conducta criminal que ha condenado a muchos brasileños a la muerte.
2. El negacionismo sólo ha provocado muertes. Donald Trump, Boris Johnson y Jair Bolsonaro son ejemplos de liderazgos irresponsables que han arrastrado a sus países a situaciones límite. Destacan, por el contrario, liderazgos como los de Angela Merkel, en Alemania, y Jacinda Ardern, en Nueva Zelanda, quienes han sorteado la crisis con amplitud política, rigor científico y conciencia social.
3. Nuestro país tiene una tradición sanitaria ejemplar, que ha superado crisis como la del Cólera (1991) y la del H1N1 (2009), que pusieran a prueba el comportamiento social de la población y su sentido de solidaridad y justicia. Tal conducta se ha mantenido inalterable hasta nuestro tiempo presente, y el pueblo de Chile ha reaccionado con sentido solidario ante la pandemia y ha reconocido, día a día, la labor encomiable y patriótica que realizan los

funcionarios de la salud. El Partido Socialista reitera su reconocimiento a la labor de quienes constituyen la primera línea de la crisis.

4. La pandemia golpeó a Chile en un momento histórico especial. El estallido social del 18 de octubre venía corriendo el cerco de lo posible para la igualdad y la justicia social, cuyo efecto político inmediato fue la materialización de la reforma constitucional que viabiliza un plebiscito para redactar una Nueva Constitución para Chile. Con decisión, y sin ambigüedades, el Partido Socialista fue protagonista de la construcción del compromiso político más importante de los últimos 30 años.

5. La pandemia suspendió, temporalmente, la presión política y social sobre el sistema y el Gobierno. En su reemplazo, el país comenzó a procesar un cambio de hábito cultural de magnitud histórica. En cuestión de días, las personas se confinaron en sus hogares porque el virus avanzaba a una velocidad récord. Pero, en seguida, prácticamente surgieron las inconsistencias y contradicciones del Ejecutivo, que el PS viene denunciando desde el 15 de marzo.

Situación del Gobierno

6. El Gobierno ha tenido una conducta errática, confusa y, en algunos casos, irresponsable en la administración de la crisis. Cuando una buena parte de los actores políticos, los alcaldes y alcaldesas y, sobre todo, la comunidad científica señalaban la necesidad de establecer una cuarentena total en la Región Metropolitana, el Gobierno decidió una política de cuarentenas flexibles, que mostraron su fracaso la tercera semana de mayo. Un aumento explosivo de casos obligó al Ejecutivo ordenar el confinamiento en toda la región. Anteriormente, fue la presión de los gremios de la salud y de la educación, junto a los alcaldes y las alcaldesas, lo que logró el cierre de los colegios. También los alcaldes y alcaldesas fueron responsables del cierre del comercio y los centros comerciales. El tiempo ha demostrado que ambas medidas eran necesarias.

7. Las instrucciones del Gobierno, y de la autoridad sanitaria, la mayoría de las veces resultan imposibles de cumplir. La cuarentena no se puede realizar con efectividad cuando no se encuentra garantizada la supervivencia de las y los trabajadores y sus familias. Resulta evidente que una persona que se gana el pan diariamente, frente al dilema de cumplir la cuarentena y salir a trabajar, va a optar por esto último. El Gobierno ha sido incapaz de reconocer que ha tomado una decisión éticamente reprochable sobre este dilema, traspasando la responsabilidad a las personas, sin hacerse cargo de la crisis.

8. El Gobierno no estaba preparado para esta crisis, aun cuando con majadería reiteren que sí lo estaban desde enero. Mienten o sencillamente se prepararon mal. No midieron, no

previeron, no calcularon. La soberbia del ministro Jaime Mañalich, de marzo pasado, se transformó en vergüenza en mayo. Esta conducta irresponsable llevó a un colapso del sistema sanitario, sobre todo en la Región Metropolitana, cuando el mismo ministro Mañalich dijo que las predicciones del Gobierno, del mes de enero, se han caído como un “castillo de naipes”.

9. El llamado “Plan Retorno Seguro” fracasó, de la misma manera que lo hizo el concepto de la llamada “nueva normalidad”. Ambos contribuyeron a la confusión en la población y en una falsa sensación de seguridad. El Gobierno no escuchó ni a la comunidad científica, ni a los alcaldes y alcaldesas ni tampoco a la oposición.

10. Las medidas y soluciones que ha planteado el Ejecutivo han sido todas, sin excepción, insuficientes. Ha sido la tónica una predilección por el goteo neoliberal, que no ha querido, o no ha sabido, dimensionar la magnitud de ninguna de las dos crisis que le ha tocado enfrentar. Así, por ejemplo, el Ingreso Familiar de Emergencia o el bono Covid son absolutamente insuficientes, y los créditos Covid-19 entregados por los bancos no han cumplido con su objetivo de salvar a la mipymes, concentrándose en empresas sanas financieramente.

11. La política de distribución de cajas de alimentos, que se encuentra en desarrollo, es una medida que busca, sobre todo, un rédito comunicacional para el Gobierno. Hubiese sido más eficiente y más práctico aumentar el monto del Ingreso Familiar de Emergencia, como lo planteamos más de una vez. Sin embargo, el Ejecutivo prefirió un tipo de impacto comunicacional, armando toda una engorrosa logística para mostrar a sus ministros repartiendo cajas de alimentos en las poblaciones. Junto a ello, las cifras han sido confusas. El Presidente Piñera señaló que la ayuda llegaría al 70% de la población. Luego el ministro de Desarrollo Social aclaró que era para el 70% más vulnerable, y al final que el destino era para esas familias que estuviesen en cuarentena obligatoria. Le exigimos al Gobierno transparencia en la entrega, en los plazos y en los criterios de distribución que implica esta operación, porque, aún así, es una ayuda para las familias más necesitadas.

12. En educación, cultura e infancia, el Gobierno tampoco lo ha hecho bien. Mucha confusión y ausencia de información y orientaciones adecuadas. En educación escolar y parvularia, no ha tenido una visión amplia como para replantear oportunamente frente a la crisis, los objetivos educativos, la flexibilidad en los métodos, el rol protagónico de los profesores en la relación con los estudiantes, sus familias y en el financiamiento. El SIMCE no tiene sentido este año. Las pruebas de acceso a las universidades deben cambiar. En educación superior, el Ejecutivo no ha reconocido el inmenso aporte que han realizado las universidades estatales, y casi todas frente a la pandemia, y no ha asumido con seriedad la situación financiera que viven.

13. La desigualdad de género también se ha expresado, con mayor fuerza, en el curso de la pandemia. “Quedarse en casa”, para muchas mujeres, se ha convertido en un verdadero infierno, porque tienen que convivir con su agresor. El Gobierno no ha sabido enfrentar esta situación y debe tomar todas las medidas dirigidas a la protección de las víctimas de violencia de género.

14. Las protestas que han comenzado en El Bosque, y que se han replicado en otras comunas del país, nos indican que hay sectores de la población que están entrando en una fase de crisis humanitaria, dramática, pero, además, inevitable, considerando las medidas del Gobierno. La derecha, como siempre, ha realizado llamados a reprimir tales manifestaciones, que se producen porque hay hambre en las poblaciones. Una miopía política propia de un sector que ha llegado 20 años tarde a todos los debates.

15. La salida de la crisis es una tarea de toda la sociedad, pero evitar una pandemia social es una responsabilidad exclusiva del Gobierno. El enfrentamiento de la crisis sanitaria y social ha contado con la contribución del PS y de toda la oposición, y lo seguirá haciendo en la medida que el Presidente de la República abandone el triunfalismo, tome conciencia de la magnitud de la crisis y comience a escuchar con atención lo que señala la comunidad científica, los gremios, alcaldes y alcaldesas y la oposición. Para los y las socialistas es indispensable abrir una nueva etapa, por lo que declaramos que el Partido Socialista acogerá todos los llamados a trabajar en conjunto para salir de la crisis, en la medida que dicho diálogo se base en soluciones concretas y efectivas y en un cambio en la gobernanza de la crisis, es decir, en hechos y no sólo en palabras.

Análisis y propuestas en áreas

En materia sanitaria

16. La política sanitaria, cuyo eje estratégico es la Atención Primaria, ha sido débil y ha impedido contener y cercar la circulación del virus. La autoridad sanitaria no ha logrado coordinar adecuadamente con los municipios y las organizaciones vecinales los servicios de atención primaria. Sin atención primaria y respuesta social organizada, es imposible la contención y propagación del virus.

17. Ante la grave amenaza de quiebres de stocks estratégicos para enfrentar la crisis, y que afecta a todos los países, el Gobierno debe establecer un marco de equidad en el acceso a los insumos y equipamientos básicos: ventiladores mecánicos, insumos médicos, medicamentos y dispositivos. Para ello, se requiere transparencia en la información.

18. La catástrofe sanitaria que enfrenta el mundo, y el país, ha desnudado con total dramatismo la realidad de un sistema estructuralmente desigual. Todo es diferente dependiendo de la clase social de la cual se haga parte: las cuarentenas en casas suntuosas es distinta a la que ocurre en departamentos de 40 metros cuadrados, el tiempo de espera del examen PCR es más corto para quienes más tienen y las medidas preventivas las pueden cumplir unos pocos, porque la mayoría, que son las y los trabajadores, tienen que salir a la calle a buscar el sustento para sus familias.

19. En el área sanitaria, el Partido Socialista, y sobre la base de las recomendaciones técnicas que nos han proporcionado nuestros expertos, propone lo siguiente:

a. Avanzar hacia el establecimiento de un Seguro Único de Salud, que permita tener una respuesta sanitaria articulada, otorgue equidad en el acceso, provea de sostenibilidad financiera y organización eficiente, permitiendo responder de mejor forma a los desafíos que el país demanda

y que han quedado de manifiesto durante el transcurso de la crisis. Australia, Canadá y Corea del Sur constituyen experiencias exitosas en este ámbito y contrastan con el sistema de Estados Unidos, donde han prevalecido lógicas de mercado y seguros privados como administradores de la salud.

b. Debemos procurar disminuir al máximo el tiempo entre el inicio de síntomas específicos y el aislamiento de las personas afectadas. Para ello, se debe poner en operación “albergues hospitalarios” y servicios médicos idóneos con dotación de salud capacitada para los cuidados de nuestros enfermos de COVID-19.

c. Aumentar la capacidad de realizar tests rápidos para coronavirus en toda la red de Atención Primaria de Salud (APS), consultorios y servicios de urgencia de hospitales, de manera de diagnosticar precozmente a los contagiados y ponerlos en aislamiento, reduciendo significativamente los tiempos de espera para conocer sus resultados. En este contexto, se debe establecer la gratuidad como bien público del examen para detectar el virus, en todo el sistema de salud.

d. Establecer el control centralizado de todas las camas de pacientes críticos a nivel nacional, tanto del sistema público como del privado, para ponerlas a disposición de los pacientes que requieran de estos cuidados al tenor de la pandemia del COVID-19.

e. Aumentar los niveles de protección a los trabajadores de la salud con suficientes insumos médicos, tales como mascarillas, escudos faciales, guantes y vestuario apropiado para evitar su contagio. Para ello, resulta indispensable la participación activa de los trabajadores en comités de seguridad en los recintos de salud y una comunicación fluida de los equipos directivos y los equipos de salud laboral.

f. Sancionar, con el máximo rigor de la ley, a quienes pretendan aumentar los precios de los

insumos necesarios para mantener la higiene pública, tales como alcohol gel, mascarillas, jabones asépticos, medicamentos y cualquier otro elemento que se requiera para esto, así como los bienes de primera necesidad. Llamamos al Gobierno a establecer una banda de precios de todos aquellos productos declarados esenciales para enfrentar esta crisis.

g. Reforzar las medidas de control de espacios comunes para evitar la propagación del virus.

h. Disponer que las FFAA., la Defensa Civil, voluntariado y fuerzas de apoyo participen en la entrega domiciliaria de alimentos, como el “Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor” (PACAM) y el “Programa Nacional de Alimentación Complementaria” (PNAC) en adultos mayores y niños.

i. Coordinar el esfuerzo del personal municipal para la entrega de medicamentos a enfermos crónicos y postrados.

En materia económica, social y laboral

20. La preocupación por el desarrollo económico es de primera relevancia, sobre todo considerando que de la actividad productiva dependen cientos de miles de empleos, y con ellos, cientos de miles de familias. Pero el Gobierno no ha resuelto adecuadamente la ecuación, porque ha optado por “la economía” por sobre la salud y la vida de las personas. Esta no es una afirmación irresponsable, porque la evidencia así lo demuestra. No habrá desarrollo productivo si porcentajes importantes de la población se contagian. Se suma la posibilidad de que los niveles de inmunidad sean dramáticamente bajos, como se ha señalado recientemente por la autoridad sanitaria. Tenemos una genuina preocupación por el desarrollo económico y las empresas.

21. Exhortamos al Gobierno a tomar una decisión ética sobre la materia. Es una ecuación que no será simétrica. Importará un costo para el Estado y el país. Debemos asumir esa realidad y pensar en el largo plazo.

22. El Gobierno confundió al país cuando quiso presentarse como el campeón mundial en gasto fiscal para enfrentar la crisis. Lo importante es la eficacia para responder a las necesidades de las y los trabajadores, las familias y las empresas. Lo concreto es que el gasto fiscal adicional no ha sido, hasta ahora, más de 3 mil millones de dólares, y no los 17 mil que incluyen los anuncios en reasignaciones presupuestarias, rebajas tributarias y postergación de pagos. Chile cuenta con recursos fiscales para respuestas más fuertes, porque por años ahorramos para los tiempos más difíciles.

23. Resulta indispensable expandir el gasto fiscal, financiado con dineros de fondos soberanos, del Fondo Estratégico Militar, de un impuesto a los más ricos, y evaluar el financiamiento a través de

deuda pública. Existe consenso mundial de que hay que hacer todo lo necesario para frenar la pandemia, tanto porque salva vidas como porque asegura una reactivación económica más acelerada. En particular, la posibilidad de endeudamiento es posible porque los datos del FMI señalan que, terminando el 2019, Chile era uno de los 12 países con menor deuda neta del gobierno general (como % PIB). Junto a ello, todos los países están incrementando su deuda pública bruta entre 10% y 15% del PIB. La propuesta económica del Colegio Médico va en este sentido".

24. Existen una serie de deficiencias que se pudieron haber previsto. Por ejemplo, el Ingreso Familiar de Emergencia alcanzará entre 1,9 y 2,1 millones de hogares y las canastas a 2,5 millones, pero, de acuerdo con el Registro Social de Hogares, el 40% más vulnerable está constituido por 3 millones de hogares, los que bordean la línea de la pobreza. Además, ninguna familia que tenga un pensionado de invalidez debe quedar fuera del beneficio completo. No se está cubriendo a una buena parte de esas familias y menos aún a la clase media necesitada, como lo ha prometido el Presidente Piñera.

25. En materia de Pymes, el balance del Fogape al 22 de mayo informa de 40 mil operaciones por más de 73 millones de UF. Al 2019, existían en el país casi un millón de micro y pequeñas empresas, de las cuales un poco menos de la mitad tienen al menos un trabajador contratado. Muchas pymes están fuera de todo. La pequeña producción campesina, los pescadores artesanales, los pequeños mineros, los feriantes. Todos ellos están quedando actualmente al margen de los beneficios del Estado.

26. En materia laboral, la situación es crítica. El Gobierno ha reconocido que el desempleo se proyecta por sobre el 18%. De acuerdo a la Superintendencia de Seguridad Social, el seguro de cesantía podría recibir la solicitud de más de 3 millones de trabajadores en el mejor de los casos, porque en el escenario más malo podría llegar hasta los 3,7 millones, por suspensión de jornadas, pactos de jornada y despidos. La situación es más compleja conforme pasa el tiempo, porque los beneficios del seguro de cesantía tienen una duración de cinco meses, en una escala decreciente en el monto que se inicia con un 70%, bajando al 35% el último mes. Esto implica que para los peores meses, la situación de las y los trabajadores será derechamente insostenible.

27. En el ámbito municipal y territorial, la desigualdad ha desnudado el dramático contraste de las comunas más ricas versus las más pobres. La peor parte se la llevan, sin embargo, las comunas rurales, que sufren la pandemia en pobreza y desconexión digital. En el caso de la Región Metropolitana, las comunas rurales no deben ser confundidas ni tratadas como comunas urbanas, como ocurre hoy en día.

Resulta fundamental, entonces, hacer un énfasis en materia municipal y desarrollar una estrategia de financiamiento que, al menos, considere los siguientes elementos:

a. Garantizar la entrega a los municipios de los recursos por Fondo Común Municipal anunciados por la Subdere en la circular N° 0159 del 30 de diciembre de 2019 y expuestos en el Sistema Nacional

de Información Municipal (SINIM) a comienzos de año.

b. La asignación de recursos extraordinarios para enfrentar los mayores gastos que representa la pandemia del COVID-19 debe ser con la flexibilidad suficiente, sobre todo considerando la situación de los municipios más pequeños, cuya capacidad de reasignar recursos dentro de su presupuesto es más limitada.

c. Desarrollar un plan especial de financiamiento para el año 2021 y siguientes, tomando en consideración los menores ingresos percibidos por la contracción de los permisos de edificación, la reducción de permisos de circulación y la disminución de los pagos por impuesto territorial, entre otros.

28. Las trabajadoras de casa particular han quedado desprovistas de todo lo que ha dispuesto el Estado ante esta emergencia sanitaria y económica. No tienen acceso al seguro de cesantía ni al Ingreso Mínimo de Emergencia, debido a que cuentan con ingresos formales. Las trabajadoras de casa particular son uno de los sectores más precarizados de la sociedad y, por lo mismo, se requiere de una política pública específica que se haga cargo de su situación de vulnerabilidad.

29. Considerando la necesidad de abrir una nueva etapa para enfrentar la crisis, el Partido Socialista de Chile ha propuesto una serie de medidas en el área económica, social y laboral indispensables para enfrentar la crisis:

a. Legislar nuevamente el Ingreso Familiar de Emergencia. El Gobierno ha impuesto su criterio en materias económicas y sociales fundamentales y los resultados han demostrado que estaban equivocados. Demandamos legislar nuevamente esta política, por seis meses, y cuyo monto sea concordado en un comité de expertos de composición pluralista, nombrado de común acuerdo, con participación de las organizaciones sociales. Resulta indispensable aumentar el monto y la cobertura de esta política. En ningún caso dicho monto puede estar por debajo de la línea de la pobreza.

b. Impuesto a los "súper ricos". Hay que fortalecer la recaudación fiscal, por ese motivo tiene plena validez la propuesta de un impuesto adicional a los "súper ricos". Este debiese gravar, sin excepción, a las fortunas más importantes del país. Tales recursos, a lo menos durante los tres primeros años, deben emplearse en un plan de reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas.

c. Utilizar el Fondo de Estabilización Económico Social (FEES), el Fondo Estratégico Militar, y la posibilidad del endeudamiento público. El Ejecutivo debe informar y emplear tanto el FEES, creado con los ahorros de la bonanza del cobre para emergencias como la que hoy se vive, como los ahorros acumulados en el Fondo Estratégico Militar. Es motivo de sospechas no

recurrir al FEES, ya que da la impresión de que el Gobierno guarda tales recursos fiscales para un eventual salvataje de los grandes grupos económicos.

d. Fondo espejo para el rescate de las microempresas y cooperativas. Frente al debate respecto del rescate de empresas estratégicas, proponemos que, de existir una medida de esas características, ésta se implemente con la mayor transparencia ante la ciudadanía y que el Estado se incorpore en la propiedad de estas compañías, con la finalidad de salvaguardar que los recursos de todos los chilenos y chilenas que se puedan usar en esta materia, garanticen su retorno, pues estas corporaciones de carácter privado luego tienen grandes utilidades. Adicionalmente, proponemos que por cada peso que el Estado invierta en el rescate de empresas estratégicas, se disponga del mismo monto para el rescate de microempresas y cooperativas, para garantizar la equidad en la distribución de los recursos para enfrentar la crisis.

e. Reajuste de la Pensión Básica Solidaria (PBS) y del Aporte Previsional Solidario (APS). El esfuerzo fiscal también debe incluir un reajuste de las PBS y del APS de, al menos, un 50% a todas las pensiones bajo el salario mínimo, dado que los adultos mayores son los que reciben con más fuerza el impacto de la pandemia. Junto a ello, hay que incorporar a las pensiones a exonerados, las pensiones Valech y Rettig, las pensiones de gracia y las pensiones básicas de invalidez.

f. Prohibir el despido de trabajadoras y trabajadores. Ninguna empresa que continúe sus operaciones podrá despedir trabajadores y trabajadoras. En el caso de empresas estratégicas, de ser necesario, el Estado podrá ayudar a su rescate mediante inyección de recursos a cambio de la participación del Estado en la propiedad de dichas compañías. A su vez, aquellas empresas que perciban utilidades durante el tiempo de esta pandemia no debieran acogerse a la Ley de Protección al Empleo.

g. Postergar el pago y prohibir el corte del suministro de servicios básicos mientras dure la emergencia sanitaria. Asimismo, postergar, sin intereses, cuotas de créditos hipotecarios, estudiantiles u otras deudas contraídas con bancos e instituciones financieras y casas comerciales.

h. Fijación de precios a todos los insumos, medicamentos y bienes de primera necesidad, y sanción para la especulación y el acaparamiento. Aquellos que infrinjan esta instrucción debieran pagar hasta con penas de cárcel.

i. No cerrar los programas ejecutados por el Estado y asegurar estabilidad laboral a las funcionarias y funcionarios públicos. Los trabajadores públicos no deben pagar en derechos y menos aún con reajustes de salarios y cumplimiento de metas. En caso de ser necesario, reorganizar las funciones del sector público. Es un deber ético del Estado no sólo mantener los

puestos de trabajo, sino también proveer los importantes servicios que muchos de los programas que se amenaza terminar tienen para chilenos y chilenas.

j. Aumentar el presupuesto y las medidas que vayan dirigidas a la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar. Las denuncias por violencia intrafamiliar han aumentado en un alto porcentaje desde que se iniciaron las medidas de cuarentena, ante lo cual el Estado deberá asegurar el bienestar y la protección a aquellas mujeres, niñas y adolescentes que hoy se ven afectadas por la violencia al interior de sus hogares. A su vez, se deberán impulsar políticas públicas y medidas específicas para que el trabajo doméstico no sea una carga exclusiva de las mujeres.

k. Aumentar el presupuesto de los municipios. Los municipios están sometidos a una extrema tensión por las carencias que la mayor parte de ellos tienen desde sus poblaciones más vulnerables. Los recursos para ayuda social con que contaban están agotados y el plan de financiamiento del Gobierno anunciado recientemente se hace cargo sólo de la mitad del déficit producto de la disminución de los ingresos por permisos de circulación, patentes comerciales y no pago de contribuciones. Es urgente refinanciar los municipios, lo que significa que el FCM debe proveer, al menos, de la fracción de ingresos propios que no percibirán.

Proceso Constituyente

30. Las fuerzas políticas que suscribimos el compromiso político más importante desde la recuperación de la democracia, el 15 de noviembre de 2019, gestado a partir de la fuerza y profunda legitimidad del movimiento social, estuvimos disponibles, en el contexto de la pandemia, para posponer el plebiscito constitucional, trasladándolo a octubre del presente año. A partir de esto, los sectores más reaccionarios del país vieron en la crisis sanitaria una mezquina oportunidad para diluir, o derechamente eliminar, el proceso constituyente. Aquello nos parece inaceptable, por cuanto los compromisos son para cumplirlos. Por otro lado, las razones económicas son inadmisibles desde todo punto de vista, porque ese argumento nos llevaría a la nefasta conclusión de que las naciones pobres estarían inhabilitadas para profundizar la democracia. La democracia no tiene precio y las chilenas y chilenos tienen el derecho de ser parte del proceso que vea nacer una nueva Constitución para nuestro país.

31. Últimamente se han realizado llamados, desde todos los sectores, a suscribir un “pacto social” que le permita al país salir de la crisis. El más reciente es el del propio Presidente de la República, quien, a través de los medios de comunicación, ha realizado una convocatoria a todas las fuerzas políticas. Una vez más, La Moneda hace del aspecto publicitario lo principal de su propuesta, lo que provoca que parte de los interlocutores respondan calculando el efecto de imagen política más que los contenidos concretos que deben concordarse.

32. Sin embargo, el PS considera que lo que se requiere es un “diálogo de urgencia para la emergencia”, en la medida de que exista disposición del Gobierno a conversar con la oposición desde la buena fe y no desde la lógica de trinchera. Aquí hay propuestas concretas que ponemos a disposición de dicho diálogo.

33. El “pacto social”, o aquello que algunos han llamado “acuerdo nacional”, se dará en el marco del proceso constituyente y no en el marco de la pandemia. Resulta evidente que ciertos sectores del oficialismo y, sobre todo, la extrema derecha, ven aquí una oportunidad para ir reemplazando, poco a poco, el proceso constituyente por un pacto general en materia económica y social. Ello es inaceptable para los y las socialistas, porque, aún en una crisis de esta naturaleza, la democracia debe abrirse camino para proyectar un futuro de justicia e igualdad.

34. El Partido Socialista de Chile, en sus 87 años de vida institucional, ha contribuido a defender los derechos de las y los trabajadores, y ha sido parte de las luchas sociales que han permitido los avances que ha tenido el pueblo de Chile. Esta no será la excepción. Hacemos un llamado a toda la militancia, a los dirigentes regionales y comunales, a los dirigentes sociales, sindicales y vecinales a mantenerse en pie y a no cejar en la lucha del presente que definirá las posibilidades que tengamos para construir el Chile del futuro, justo y solidario, como lo soñaron nuestros fundadores.

**COMITÉ CENTRAL
PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE**